

Pagar la adaptación al cambio climático

Steve Suppan y Karen Hansen

En un artículo de la edición 33, de junio pasado, de La Jornada del Campo (“Buscando la salvación por medio del presupuesto”), comentábamos cómo en las consultas del Congreso estadounidense sobre la próxima Ley Agrícola o Farm Bill, los congresistas no quisieron reconocer el elefante en la casa agrícola: el cambio climático.

Los pasos de este elefante agudizan la volatilidad de la oferta y la demanda de alimentos y por tanto agitan el comportamiento de los precios. El Partido Republicano ganó las elecciones estadounidenses con candidatos que niegan la existencia del elefante, el cual, sin embargo, sigue pisando el jardín y mucho más.

Pues bien, ahora llegaron a Cancún 20 mil o más personas para dialogar. ¿Cuánto cuesta, quiénes pagan, y qué hace falta para que el elefante no acabe con el jardín? Y aquí se acaba la metáfora, porque se trata del daño a nuestro planeta y sus ocupantes.

Hace casi un año, en Copenhague, unos pocos jefes de Estado negociaron un acuerdo político no vinculante en el cual los países ricos se comprometieron a reunir un fondo de 30 mil millones de dólares para el arranque rápido (fast start) del financiamiento climático entre 2010 y 2012. Se propuso un fondo con recursos balanceados para proyectos tendientes a reducir los gases invernadero por un lado y por otro proyectos para facilitar la adaptación al cambio climático en las naciones más vulnerables.

En noviembre un estudio breve del Instituto Internacional para el Ambiente y el Desarrollo (www.iied.org) mostró que es previsible que sólo entre 11 y 15 por ciento del arranque rápido se dedique a la adaptación. ¿Por qué hay tanto desbalance en este fondo, siendo que los países más vulnerables exigen fondos de compensación para adaptar sus recursos, sobre todo en la agricultura, a las consecuencias variadas del cambio climático?

Resulta que los países donantes piensan invertir la gran mayoría del arranque rápido para crear una materia prima artificial: el crédito de compensación de emisiones del carbono. Sus empresas pueden comprar estos créditos para cumplir con sus cupos de emisión (no-vinculantes), pero sin reducir sus propios gases de efecto invernadero. ¡Otra innovación financiero-ambiental! Ésta, auspiciada por los bancos en la Asociación Internacional del Comercio de Emisiones (www.ieta.org) y sus colegas académicos.

Se sabe ya que los llamados mercados del carbono no sobreviven sin el apoyo legislativo y subsidios gigantescos del Estado en la forma de los permisos para contaminar, regalados por el Estado a las empresas. En Estados Unidos la Cámara de Representantes aprobó en junio de 2009 la ley Waxman-Markey, que regula el comercio de emisiones, pero está estancada en el Senado. El valor de los permisos que esta legislación considera hubiera llegado a un rango de entre 50 mil y 300 mil millones de dólares para 2017, según las estimaciones del gobierno. El colapso de la Bolsa Climática

de Chicago, anunciado en octubre, es otro testimonio de cómo los llamados mercados privados dependen ampliamente del gobierno.

Sin embargo, un informe de la Oficina del Secretario General de las Naciones Unidas –formalizado en Cancún, aunque publicado antes–, considera que los mercados de carbono contarán con más de la mitad de los cien mil millones de dólares anuales para el financiamiento de largo plazo, a partir de 2020, de los proyectos aludidos en el Acuerdo de Copenhague. No es infrecuente que los presupuestos y las cifras econométricas sean optimistas, pero este informe tiene una fe ciega en el mercado.

Wall Street pagó una buena parte de la victoria electoral del Partido Republicano y espera un mercado del carbón de unos dos trillones de dólares para 2017, subsidiado por los mismos votantes que denunciaron recientemente el alto nivel de gastos gubernamentales durante la campaña electoral. Y puede ser que si el Partido Republicano gana la Presidencia en 2012, descubrirá que sí existe el cambio climático, o por lo menos su parte más rentable.

Ya que el porvenir político estadounidense es tan fatídico, ¿a qué fue el Instituto de Políticas Agrícolas y Comerciales (IATP) con sede en Minnessota– a las negociaciones en Cancún? Fuimos a tratar de convencer a los gobiernos que los costos verdaderos de no financiar los proyectos del Fondo de Adaptación del Convenio Climático serán mucho más caros con cada año de demora. En el caso de Estados Unidos tan sólo los gastos de reparación a los daños infraestructurales llegarán a 271 mil millones de dólares anuales a partir de 2025, según un estudio de Frank Ackerman y Elizabeth Stanton.

Urge que el Fondo de Adaptación financie por lo menos con unos tres mil millones de los 30 mil millones de dólares comprometidos para 2010-2012, para que los países más vulnerables puedan defenderse y el convenio puede cumplir sus obligaciones.

Instituto de Políticas Agrícolas y Comerciales (IATP)